

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

AUTO

En atención a lo establecido en el artículo 132 del CGP deviene necesario ejercer un control de legalidad en contra del auto que admitió el recurso de apelación interpuesto por el procurador judicial de la parte actora, pues la sustentación del recurso el mismo no versó sobre asuntos que hubieren sido decididos por el juez de instancia, en atención a ello, sus motivos de inconformidad, no fueron resueltos en sentencia, y por tanto no es posible atender al mismo, empero se conocerá en el grado jurisdiccional de consulta, de conformidad a las previsiones del artículo 69 del artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, analizando en primer término la existencia o no de la relación laboral y, luego, la prescripción decretada en primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, Francisco Arango Torres y John Jairo Acosta Pérez, proceden dentro del proceso ordinario con radicado número

05088-31-05-001-2012-0051-01, promovido por **FRANCISCO JAVIER LÓPEZ VALENCIA** contra **FABRICATO S.A., COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COODESCO Y COOPERATIVA DE TRABAJADORES TEXTILEROS DE LA CONFECCIÓN**, a revisar en consulta sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Bello el 20 de septiembre del año 2016 en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por ser totalmente adversa a los intereses del trabajador.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...”, se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **013 de 2023**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante acción judicial, el demandante solicitó se declarara que el contrato de asociación que existió entre él y las cooperativas de trabajo asociado Coodesco y Cootexcon fue simulado, por tanto, se establezca la existencia de un contrato laboral entre Fabricato y el señor Francisco Javier López Valencia por el periodo comprendido entre 11 de marzo de 1996 y el 3 de febrero de 2009, así como la solidaridad en el pago por indemnización por despido injusto, vacaciones, primas de servicio, cesantías, intereses a las cesantías y sanciones por no consignación a las cesantías.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones, exhibió que estuvo vinculado con la empresa Tejicondor SA por medio de la empresa de servicios temporales Vinculamos, del 12 de junio de 1988 al 11 de julio de 1989, luego del 17 de julio de 1989 al 15 de julio de 1990 y 23 de julio de 1990 al 13 de agosto de 1990.

Argumentó que para el 1996, regresó a laborar nuevamente a Tejicondor y en esa ocasión se vinculó por intermedio de la empresa de servicios temporales Jiro SA hasta el 10 de marzo de 1997 y del 3 de abril de 1997 hasta el 15 de marzo de 1998; entre el 16 de marzo de 1998 y el 10 de mayo de 1999 se vinculó por intermedio de Cooperativa de Trabajo Asociado Coodesco. Igualmente, entre el 11 de mayo de 1999 y el 3 de febrero de 2009 se vinculó por intermedio de Cootexcon para trabajar inicialmente con Tejicondor SA y posteriormente con Fabricato SA. Narra que durante dichas vinculaciones desempeño las funciones bajo la subordinación de Fabricato SA y Tejicondor SA, de la mano con otros empleados vinculados directamente con dichas empresas pero con situaciones salariales diferentes.

Finalmente expone que para el 3 de febrero de 2009 se le dio por terminada su relación laboral sin explicación alguna y en marzo se le prohibió el ingreso a la asamblea de asociados de Cootexcon.

Admitida la demanda mediante auto el doce (12) de diciembre del año dos mil trece (2013), y notificada a los accionados, dieron respuesta al libelo gestor así:

Fabricato, se opuso a la prosperidad de las pretensiones incoadas y afirmó que, el demandante nunca prestó sus servicios a la compañía. Refirió, que el demandante expone en el libelo gestor haber prestado servicios para Tejicondor, no con Fabricato, pues dicha situación solo puede verse en el hecho cuatro de la demanda.

En atención a dicha afirmación, explica que, nada le consta entre el año 1988 y el año 2002, pues sólo hasta esa fecha existió la fusión a que se hace referencia, pues

antes de ello, eran dos sociedades anónimas completamente independientes. Insistió en su replica que el actor no tuvo subordinación alguna con Fabricato SA pues las instrucciones, horarios de trabajo y demás eran otorgadas por la cooperativa.

Finalmente, interpuso las excepciones de: “Inexistencia de vínculo laboral entre Fabricato SA y el señor López V”, “Falta de causa y de título para pedir”, “prescripción extintiva”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Buena Fe”, “Inexistencia de los vicios que afecten la voluntad del señor V.A. en la celebración de actos cooperativos con la cooperativa de trabajo asociado”, “inexistencia de solidaridad entre Fabricato SA y las cooperativas de trabajo asociado” y “ no existe obligación alguna a cargo de Fabricato SA para pagar al accionante la sanción moratoria del artículo 65 del CST ni la sanción moratoria por el no pago de las cesantías”.

Por su parte, mediante curador ad-litem en cumplimiento de lo reseñado en el artículo 29 del CPT y SS, las pasivas Coodesco y Cootexcon, dieron respuesta a la demanda, exponiendo que son ciertos los hechos probados que se respaldan con documental aportada por el demandante, ello es, la vinculación del actor como asociado de la cooperativa Coodesco CTA, la afiliación a Cootexcon, CTA, sin embargo, explica que, no se aporta prueba del trabajo en misión entre el 14 de agosto de 1990 y el 10 de marzo de 1996.

Interpuso las excepciones de “ inexistencia de la obligación a cargo de la parte demandada”, “ cobro de lo no debido”, “temeridad y mala fe del demandante”, “innominadas”.

En sentencia del veinte (20) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016) el Juzgado Laboral del Circuito de Bello declaró probada la excepción de

prescripción absolvió a la pasiva de las pretensiones incoadas en su contra, y profirió condena en costas a cargo del demandante.

Preliminarmente se hace necesario exponer que, corrido el traslado para alegar, ninguna de las partes presentó alegaciones ante esta instancia.

PROBLEMA JURÍDICO

Consiste en determinar en sede de consulta, si en el presente caso, existió una verdadera relación laboral entre el demandante y Fabricato SA, entre 11 de marzo de 1996 y el 3 de febrero de 2009, siendo la cooperativa Coodesco y Cootexcon simples intermediarios de la relación, y de ser así, se verifique la procedencia del pago de la indemnización por despido injusto, vacaciones, primas de servicio, cesantías, intereses a las cesantías, sanción por no consignación de cesantías, sanción moratoria, prima y beneficios convencionales.

En orden a decidir, se tendrán en cuenta las siguientes

CONSIDERACIONES

Respecto a la intermediación laboral que se predica en el proceso, y la voluntad de enmascarar dicha relación contractual, en sentencia C 211 de 1 de marzo de 2000 la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 59 de la Ley 79 de 1988, explicando, que las cooperativas de trabajo asociado nacieron de la voluntad libre y autónoma de un grupo de personas que se unen para trabajar mancomunadamente bajo las reglas contenidas en los estatutos o reglamentos internos. En este tipo de acuerdo, los socios son precisamente los mismos trabajadores y por ende, pueden pactar las reglas que han de gobernar las relaciones

laborales, las cuales, pueden estar al margen de las normas que tradicionalmente regulan el trabajo.

Bajo esta premisa, todos los asociados tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo aportado y a participar en la distribución equitativa de los excedentes que obtenga la cooperativa. Sólo en casos excepcionales, y en forma transitoria u ocasional se les permite contratar trabajadores no asociados, quienes deben registrarse por la legislación laboral vigente.

Así las cosas, la Cooperativa de trabajo asociado, tienen como situación particular que sus socios son simultáneamente dueños y trabajadores de aquella; es decir, existe identidad entre asociado y trabajador, sin la posibilidad de hablar de empleadores y trabajadores, como en las relaciones de trabajo subordinado, razón por la cual a los socios-trabajadores de tales cooperativas no se les aplican las normas del Código Sustantivo del Trabajo.

Ahora, los artículos 17 del Decreto 4588 de 2006 y 7 de la Ley 1233 de 2008 prohíben expresamente a las cooperativas o precooperativas actuar como empresas de intermediación laboral, disponiendo del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión, con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes, pues es en ese momento, cuando se desdibuja la existencia de la relación laboral, teniendo derecho el trabajador, en esas condiciones, a que se le considere como trabajador dependiente de la persona natural o jurídica que se beneficia de su trabajo; a que se le aplique la legislación laboral y no la comercial o civil; y a que el tercero contratante, la Cooperativa o Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos sean solidariamente responsables de las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado.

En sentencia CSJ SL 25713-2006, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, precisó que cuando una persona natural o jurídica contrata a una cooperativa de trabajo asociado para prestar un servicio, ejecutar una obra o producir determinados bienes, y los trabajadores que adelantan la ejecución de las actividades en desarrollo del respectivo contrato se encuentran sujetos a subordinación laboral respecto de la beneficiaria, deben ser considerados como trabajadores de la beneficiaria para todos los efectos legales, por concurrir los elementos que configuran una verdadera relación de trabajo, en atención al principio de la primacía de la realidad sobre las formas que consagra el artículo 53 de la Constitución Nacional.

Así es, que deben existir elementos diferenciadores que dan pie a entender si la relación laboral existe o no : 1) El condicionamiento del pago del aporte al cumplimiento de las condiciones señaladas por la cooperativa o por un tercero; 2) El uso del poder coercitivo o disciplinario sobre el asociado; y 3) La dependencia y subordinación del asociado en relación con el tercero al que debe prestar sus servicios, así como las condiciones de trabajo. (Sentencia de Constitucionalidad 645 de 2011)

En reciente providencia SL1413-2022, la Corte Suprema de Justicia hizo claridad sobre el tema así:

“Las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado son aquellas empresas sin ánimo de lucro que vinculan el trabajo personal de sus asociados para la producción de bienes, ejecución de obras o la prestación de servicios económicos, profesionales, intelectuales o científicos, para lo cual fijan sus propias reglas conforme a las disposiciones legales y con las cuales autogobiernan sus relaciones. En este sentido, una característica principal de tales entes es que sus asociados gozan de plena autonomía técnica, administrativa y financiera en la prestación de sus servicios, y por ello no se rigen por la legislación sustantiva y ordinaria laboral.

Sin embargo, cuando esta forma de contratación se utiliza de manera fraudulenta para

disfrazar u ocultar la existencia de una verdadera relación subordinada, la Corte ha considerado que se incurre en una indebida e ilegal intermediación laboral, expresamente prohibida en los artículos 7.º de la Ley 1233 de 2008 y 63 de la Ley 1429 de 2010, los dos últimos reglamentados por el Decreto 2025 de 2011. Asimismo, ello acarrea como consecuencia la declaratoria del contrato realidad del trabajador asociado disfrazado con la empresa que se benefició de sus servicios y, por tanto, esta debe responder solidariamente junto con la cooperativa de trabajo asociado por todos los efectos jurídicos laborales derivados.

Lo anterior porque en estos eventos se entiende que la precooperativa o cooperativa actúa como simple intermediaria en los términos del artículo 35 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con el numeral 3.º del artículo 7.º de la Ley 1233 de 2008, que consagra la solidaridad para el caso específico de la intermediación laboral a través de las cooperativas y prohíbe expresamente que aquellas actúen como intermediarias o empresas de servicios temporales a fin de suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión (CSJ SL2842-2020). Incluso, con tales actuaciones ilegales la entidad cooperativa puede verse incurso en causales de disolución y liquidación y perder su personería jurídica, además de ser acreedora de diversas sanciones.

En esa dirección, la Corporación ha adoctrinado que la prohibición de actuar como simples intermediarias en el caso de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado se acentúa especialmente en el marco de servicios y actividades misionales permanentes que se relacionen directamente con la producción del bien o servicios característicos de la empresa usuaria. Sobre este particular, debe tenerse presente que en la sentencia CSJ SL5595-2019 la Corporación asentó:

El personal requerido en instituciones o empresas para el desarrollo de actividades misionales permanentes, no puede estar vinculado a través de cooperativas que hagan intermediación laboral o bajo otra modalidad contractual que afecte los derechos laborales y el empleo en condiciones dignas de los trabajadores.

Ello precisamente se extrae del citado artículo 7.º de la Ley 1233 de 2008 y del Decreto 2025 de 2011, que en su artículo 1.º definió que «se entiende por actividad misional permanente aquellas actividades o funciones directamente relacionadas con la producción del bien o servicios característicos de la empresa» (subraya la Sala).

Asimismo, es oportuno mencionar que si en el asunto en concreto se acredita que la cooperativa y por tanto el trabajador o trabajadores asociados no son dueños de los medios de producción o laborales, la Corte ha precisado que si bien ello no acredita como tal la subordinación, es sin duda un elemento indicativo de que el vínculo de trabajo asociado no es real sino meramente aparente y esconde así la pretensión empresarial de deslaboralizar el personal de una operación del proceso productivo de la empresa usuaria a través de un ente que carece de una estructura propia y especializada, ni es autónoma en su gestión administrativa y financiera (CSJ SL, 17 oct. 2008, rad. 30605, CSJ SL665-2013, CSJ SL6441-2013, CSJ SL12707-2017 y CSJ SL1430-2018). “

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, en el expediente físico, reposa certificación de Vinculamos en donde se expresa que, el demandante se encuentra vinculado como trabajador en misión, por periodos interrumpidos entre el 12 de julio de 1988 y el 13 de agosto del año 1990, (folio 40 expediente físico), certificación expedida por Jiro (folio 41) en donde dice que el actor trabajó en misión para Tejicondor desde el 11 de marzo de 1996 y hasta el 10 de marzo de 1997 y desde el 3 de abril de 1997 hasta el 15 de marzo de 1998, Certificación de Coodesco (folio 42) en donde se establece que el actor ha estado vinculado en la cooperativa entre el 16 de marzo de 1998 y el 10 de mayo del año 1999, Certificación de Cootexcon que expone el demandante fue trabajador asociado desde el 11 de mayo de 1999 hasta el 3 de febrero de 2009 (folio 43).

Ahora, es importante tener en cuenta que el señor Francisco López Valencia de acuerdo a folio 45, integraba el consejo de administración de la cooperativa Cootexcon, cooperativa que para el 29 de enero de 2009 le informó que desde el 30 de enero de esas calendas se daba por terminada la labor por la inexistencia de un puesto de labor.

En audiencia, se recibió por el *a quo* los testimonios de los señores Pablo Elías Román Villa, y Roberto Antonio Muriel Figueroa, quienes coincidieron en exponer conocer al demandante, quien laboró al servicio de Tejicondor y Fabricato por intermedio de otras empresas o cooperativas, que siempre recibió instrucciones por directas de Fabricato, que incluso el demandante era el representante de la cooperativa dentro de la empresa Fabricato y que él, no tenía injerencia respecto a los demás compañeros, pues todas las instrucciones eran direccionadas por Fabricato SA, quien era el dueño de los insumos y máquinas con las cuales se desarrollaba la labor.

Estas declaraciones dan luz respecto a que el demandante al desarrollar sus funciones para Fabricato SA, no lo hacía de manera autónoma ni se beneficiaba del servicio, por el contrario, lo era bajo las órdenes Fabricato SA, con los utensilios que era proporcionados por ésta y en las instalaciones de la empresa, es decir, bajo el control de la demandada haciendo parte de su organización al cumplir los horarios de trabajo asignados y con una remuneración periódica que si bien era pagada por intermedio de la cooperativa, remuneraba el servicio que se prestaba por el demandante para Fabricato SA.

Es por ello, y con la finalidad de amparar el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, es posible concluir que las cooperativas Coodesco y Cootexcon actuaron como simple intermediarias, pues no organizaban, controlaban ni se beneficiaban del servicio, sino, que los pusieron a disposición de un tercero.

Sobre este tema, en la sentencia CSJ SL6441-2015, reiterada en la CSJ SL1430-2018 y CSJ SL1507-2022-2021, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia expuso:

“Ahora bien, la Corporación no desconoce que la organización del trabajo autogestionario, en torno a las cooperativas de trabajo asociado, constituye una importante y legal forma de trabajo, paralela a los vínculos subordinados, pero dicha forma de contratación no puede ser utilizada de manera fraudulenta para disfrazar u ocultar la existencia de una verdadera relación subordinada, que fue lo que ocurrió en el sub judice; así también se ha reiterado en múltiples ocasiones. Baste recordar lo dicho en sentencia CSJ SL, 6 dic. 2006, Rad. 25713:

(...) no puede ser utilizada de manera fraudulenta para disfrazar u ocultar la existencia de verdaderas relaciones de trabajo, con el fin de evadir el reconocimiento y pago de derechos laborales legítimamente causados en cabeza de quienes, pese a que en apariencia fungieron como cooperados, en realidad han ostentado la calidad de trabajadores subordinados al servicio de una persona natural o jurídica. Esa conducta no cuenta con respaldo jurídico y constituye una reprochable tergiversación del objetivo que persiguió la ley al permitir el funcionamiento de esos

entes cooperativos, en los que debe prevalecer real y efectivamente, mas no sólo en apariencia, el trabajo cooperado y mancomunado de los trabajadores que de manera libre hayan tomado la decisión de organizarse para desarrollar su capacidad laboral.”

En atención a lo explicado, la prueba recaudada da cuenta de los elementos que según la jurisprudencia analizada permiten identificar la existencia de una verdadera relación de trabajo entre el demandante Francisco Javier López Valencia y Fabricato, de manera discontinua.

Respecto a los extremos de la relación contractual, pese a la certificación que reposa en folio 40 y de la cual, ya se hizo referencia, no puede predicarse la existencia de relación laboral desde el año 1988, pues los testimonios recibidos no fueron claros respecto a dicho extremo temporal ni Vinculamos fue parte del proceso, igual suerte corre el tiempo certificado por Jiro, en el año 1996 a 1998.

En razón a ello, solo puede hablarse del inicio de la relación laboral desde el 16 de marzo de 1996, pues en atención al artículo 67 del CST, Fabricato SA, conforme a la fusión con Tejicondor deberá responder solidariamente.

El extremo final de la relación laboral que se declara, fue confesado por el demandante en su interrogatorio de parte, en donde aclara que pese a lo expuesto en los hechos de la demanda la prestación del servicio a favor de Fabricato S.A. feneció el 30 de enero del año 2009, como se lee en misiva que reposa en folio 46 del expediente, situación que se compagina con la liquidación final de prestaciones sociales que reposa en página 47. Es menester aclarar que la certificación que reposa en página 43 del expediente y data de extremo final 3 de febrero del año 2009, enuncia esta fecha como terminación del acuerdo asociativo entre el actor y Cootexcon CTA, pero no, la prestación del servicio con Fabricato, es decir, hasta esa fecha el actor hizo parte de la cooperativa y de la junta directiva de la misma. Concluyéndose un extremo final el 30 de enero del año 2009.

En los anteriores términos ha de adicionarse la sentencia objeto del grado jurisdiccional de consulta.

Previo a establecer la condena en concreto, es importante dar estudio a las excepciones propuestas por la demandada Fabricato, en donde se resalta la excepción de Prescripción.

Según lo dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las acciones que emanan de las leyes sociales prescriben en tres años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se hizo exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador sobre el derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción pero solo por un lapso igual.

Adicionalmente, sobre la interrupción del término de prescripción, el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, vigente para el 3 de febrero de 2013, fecha de presentación de la demanda, contempla la posibilidad de que el término de tres años se entienda interrumpido desde la fecha de radicación de la demanda, siempre que el auto admisorio de aquella o del mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del año siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Y, una vez transcurrido ese tiempo, el efecto solo se producirá con la notificación del auto admisorio al demandado.

En el caso de marras terminada la relación laboral el 30 de enero del año 2009, no reposa solicitud alguna elevada ante el empleador que interrumpiera la prescripción por lo cual, hasta el 30 de enero del año 2012, contaba el actor para acceder a la jurisdicción elevando su derecho de acción.

Contrario sensu, el escrito de demanda fue presentado el 3 de febrero del año 2012, como puede verse en folio 9, y, por ende, la prescripción extinguió el derecho del demandante.

Ante la prosperidad parcial de las pretensiones, se **REVOCA** la condena en costas impuesta en primera instancia a cargo del accionante, y así mismo, por las mismas razones, no se condena en costas a la parte demandada (numeral 5, artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable por analogía al Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, conforme al artículo 145 del último estatuto en mención).

En consecuencia, se **ADICIONA, CONFIRMA y REVOCA** la sentencia, dada por el Juez Laboral de Bello.

Sin costas en esta instancia, dada la revisión vía consulta.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: ADICIONAR la sentencia que se revisa en cumplimiento del grado jurisdiccional de consulta, en cuanto declarar la existencia de relación laboral entre el actor, como trabajador, y FABRICATO S.A., como empleador, entre el 16 de marzo de 1996 y el 30 de enero de 2009.

SEGUNDO: REVOCAR la condena en costas impuesto en primera instancia a cargo del actor.

TERCERO: CONFIRMAR la decisión que se revisa en virtud del grado jurisdiccional de Consulta, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c14d2dc3c5f1d8b916866265f569f8f5491d0e537d5ec1d4e07ed15b8a88655f**

Documento generado en 02/02/2023 03:29:33 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>